



RESOLUCION N. 04275

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas por la Resolución 01466 de 24 de mayo 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, en cumplimiento con lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 959 de 2000, la Resolución 931 de 2008, el Decreto 1594 de 1984, el Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984, y;

CONSIDERANDO

Que los días 13 de enero de 2010 y 08 de septiembre de 2010, se realizaron las visitas técnicas en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, en donde se encontró publicidad exterior visual de propiedad del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, infringiendo presuntamente la normativa ambiental vigente.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de esta Secretaría, emitió el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010, en cuanto a la norma aplicable al presente proceso, los cuales sirvieron de fundamento técnico para proferir el Auto No. 3683 del 23 de agosto de 2011.

DEL AUTO DE INICIO

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, mediante **Auto No. 3683 del 23 de agosto de 2011**, inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario de la publicidad exterior visual ubicada en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que el anterior Auto fue notificado por aviso fijado el 04 de noviembre de 2011 y desfijado el 21 de noviembre de 2011, comunicado al Procurador 4° Judicial II Agrario y Ambiental de Bogotá mediante radicado No. 2012EE035398 del 16 de marzo de 2012.



Que posteriormente la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de esta Secretaría, emitió el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012 el cual aclaro el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010, en cuanto a las infracciones contenidas en el acta de visita y la norma aplicable al presente proceso, los cuales sirvieron de fundamento técnico para proferir el Auto Aclaratorio de Inicio No. 00106 del 04 de febrero de 2013.

DEL AUTO DE INICIO QUE ACLARA

Que con base en el Concepto Técnico precitado esta Autoridad Ambiental mediante **Auto No. 00106 del 04 de febrero de 2013**, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), dispuso:

*“(…),**ARTÍCULO PRIMERO.**- Aclarar el auto No. 3683 del 23 de Agosto de 2011, para tener en cuenta el concepto técnico No. 07378 del 19 de Octubre de 2012 por el cual se hace unas aclaraciones, tendientes a continuar el proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental iniciado en contra del señor RAUL ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.296.951 en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado APUESTAS DINASTIA y de los elementos publicitarios instalados en la Carrera 16 B No. 53-05 Sur de esta Ciudad, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.”*

Que el anterior Auto fue notificado por edicto el cual se fijó el 27 de junio de 2013 y desfijado el 11 de julio de 2013, con constancia de ejecutoria el 12 de julio de 2013, publicado en el Boletín Legal Ambiental el 28 de marzo de 2014 y comunicado al Procurador 4° Judicial II Agrario y Ambiental de Bogotá mediante radicado No. 2013EE052522 del 08 de mayo de 2013.

DEL PLIEGO DE CARGOS

Que mediante **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014**, se formuló, en el artículo primero, al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, el siguiente cargo:

“(…)

CARGO PRIMERO: *No dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003, Art. 87 numeral 1 del Acuerdo 79 de 2003, ya que se debe proteger y exaltar las calidades urbanísticas y arquitectónicas de los inmuebles individuales, conjuntos, sectores y barrios del patrimonio inmueble en los cuales no se debe colocar ningún tipo de propaganda visual externa, con excepción de los que expresamente permitan los reglamentos; y,*



CARGO SEGUNDO: *No dar cumplimiento al artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, los cuales establecen los requisitos para el registro de los elementos de publicidad.”*

Que mediante radicado No. 2014EE169231 del 13 de octubre de 2014, esta entidad envió citación para la notificación personal del anterior acto administrativo, la cual no fue posible por lo que se procedió a notificar por edicto fijado el 22 de junio de 2015, desfijado el 26 de junio de 2015 con constancia de ejecutoria el 30 de junio de 2015; en cumplimiento del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

DE LOS DESCARGOS

Que de acuerdo con el Artículo Tercero del **Auto No. 4616 del 01 de agosto de 2014**, el investigado contaba con diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este, para que directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, presentara por escrito los descargos a que hubiere lugar y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fueran conducentes.

Que revisado el expediente **SDA-08-2011-1387** y el sistema de información ambiental - FOREST de la Secretaría Distrital de Ambiente, no se evidencia la presentación de descargos por parte del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario la publicidad exterior visual instalada en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C. Así las cosas, se establece que el presunto infractor no ejerció el derecho de defensa, dado que no radicó escrito de descargos ni solicitó práctica de pruebas, dejando incólume el acto administrativo.

DE LAS PRUEBAS

Que mediante el **Auto No. 00499 del 3 de abril de 2017**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro del Procedimiento Sancionatorio Ambiental iniciado por esta Entidad mediante **Auto No. 3683 del 23 de agosto de 2011** aclarado a través del **Auto No. 00106 del 04 de febrero de 2013** en contra del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario de la publicidad exterior visual, instalada en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, vulnerando presuntamente con esta solo una conducta establecida en el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez instalo sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental.

Que esta Entidad dentro de la etapa probatoria, y a través del **Auto No. 00499 del 3 de abril de 2017**, ordenó en su Artículo Segundo, incorporar como pruebas el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado



con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, por ser éstos un medio probatorio conducente, pertinente y necesario para demostrar la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción ambiental.

Que esta Autoridad Ambiental mediante oficio con radicado No. 2017EE82633 del 08 de mayo de 2017, realizo citación al señor **RAÚL ESTRADA** para realizar la respectiva notificación del **Auto No. 00499 del 3 de abril de 2017**, no obstante, como quiera que no fue posible realizar la notificación, esta Secretaría procedió a notificarlo por edicto fijado el 02 de octubre de 2017 y desfijado el 13 de octubre de 2017, quedando ejecutoriado el 17 de octubre de 2017.

Que en desarrollo de las pruebas incorporadas por el **Auto No. 00499 del 3 de abril de 2017**, ha de resaltarse que:

1. El Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, permitió a esta entidad determinar la sanción de acuerdo con el grado de afectación paisajística.
2. Se evaluó jurídica y técnicamente todos los documentos que reposan en el Expediente SDA-08-2011-1387, emitiendo el **Informe de Criterios No. 03340 del 26 de noviembre del 2018**, en el cual se establecen los criterios para tomar una decisión de fondo respecto del proceso que nos ocupa.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ESTA SECRETARÍA

Que una vez efectuada la revisión documental del expediente SDA-08-2011-1387, se encontró la siguiente actuación técnica por parte de esta Secretaría:

El **Concepto Técnico** No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, junto con el registro fotográfico de Control y Seguimiento a Elementos de Publicidad Exterior Visual de los días 13 de enero de 2010 y 08 de septiembre de 2010, que dieron origen a los mencionados conceptos, sirvieron de argumento técnico para expedir el **Auto No. 3683 del 23 de agosto de 2011** aclarado a través del **Auto No. 00106 del 04 de febrero de 2013**, por medio del cual se da inicio al proceso sancionatorio, ya que como se evidencia en el material probatorio, el investigado instalo publicidad exterior visual sin contar con registro ante esta Autoridad Ambiental, lo cual vulnera el artículo 30 del Decreto 959 de 2000, en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, conducta por la cual mediante el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014**, se le formularon cargos al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario y/o anunciante de la publicidad exterior,

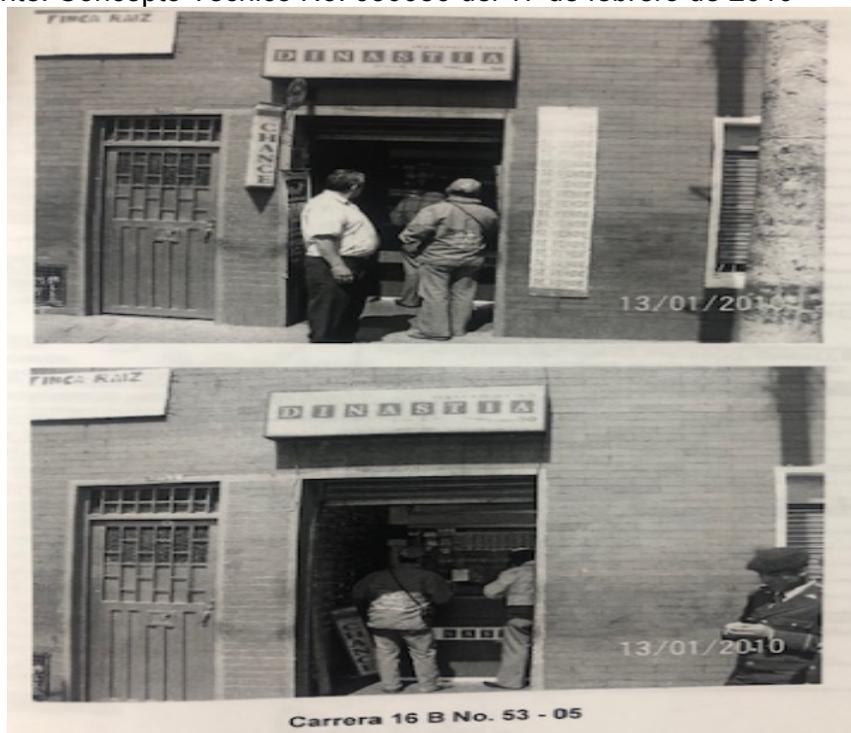


instalada en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.

En el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, están soportados con las siguientes fotografías registradas los días 13 de enero de 2010 y 08 de septiembre de 2010, fecha en que se realizaron las visitas técnicas en el establecimiento comercial ubicado en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, donde se encontró que se instaló publicidad exterior visual sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente: Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010



CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar



medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho. De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”* y en el artículo 80 ordena al Estado que *“...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”*. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, en el inciso 2° del mencionado artículo, se refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del Estado para *“imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”*.

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.



Que el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: “En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, estableció taxativamente las causales de cesación de procedimiento, las cuales se describen a continuación:

“ARTÍCULO 9°. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:

- 1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
- 2o. Inexistencia del hecho investigado.
- 3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
- 4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales 1o y 4o operan sin perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.”

Que el artículo 23 Ibidem, estableció la cesación de procedimiento, en los casos en los cuales apareciera demostrado plenamente alguna de las causales señaladas en el artículo 9° de la misma ley, para lo cual se deberá expedir el acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor. La cesación de procedimiento solo se podrá declarar antes del auto de formulación de pliego de cargos, excepto en los casos de fallecimiento del infractor.

Para el caso en comento, esta Autoridad Ambiental no encuentra ninguna causal legal para que opere la cesación del procedimiento; así mismo, no se evidencia que el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, haya presentado solicitud expresa de cesación de procedimiento por alguna de las causales indicadas en el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009.



Que frente a la conducta objeto de infracción regulada en el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, como instalar publicidad exterior visual sin registro, es de ejecución instantánea, y por tanto, su adecuación, el desmonte y/o la solicitud y obtención posterior del registro del elemento de Publicidad Exterior Visual, no exime al responsable de la imposición de la sanción prevista en la normatividad ambiental en lo que tiene que ver con Publicidad Exterior Visual.

Que es necesario resaltar lo establecido en el artículo 9 del Decreto 959 de 2000 **“Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá”**, el cual indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 9. Responsables. Son responsables por el incumplimiento de lo que aquí se reglamenta la persona natural o jurídica que elabore el aviso, el anunciante y el propietario del establecimiento o predio que coloque el aviso sin el cumplimiento de los requisitos previstos quienes se harán acreedores a las sanciones establecidas en este acuerdo”. (Resaltado fuera de texto).

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la exequibilidad del párrafo del artículo 1° y el párrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, estableció:

“Los párrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”



Tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (Subrayado fuera del texto)”

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.” (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”

Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "...dentro de los límites del bien común...".



Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

“...Para esta Corte, entonces, no cabe duda de que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia...”

Se considera pertinente en este momento, hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

“La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).”

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

“El medio ambiente desde el punto de constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo.”

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio



ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

DEL CASO EN CONCRETO

Que descendiendo al caso sub examine, con fundamento en la precitada norma, es claro que la responsable del incumplimiento de las normas ambientales en materia de publicidad exterior visual se contempla que el propietario y anunciante, en este caso es el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, responsable por el incumplimiento de la normatividad ambiental que regula lo pertinente a la publicidad exterior visual, en los términos del artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, teniendo en cuenta que instalo publicidad exterior visual sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental.

FRENTE A LOS SIGUIENTES CARGOS:

- **CARGO PRIMERO:** *No dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003, Art. 87 numeral 1 del Acuerdo 79 de 2003, ya que se debe proteger y exaltar las calidades urbanísticas y arquitectónicas de los inmuebles individuales, conjuntos, sectores y barrios del patrimonio inmueble en los cuales no se debe colocar ningún tipo de propaganda visual externa, con excepción de los que expresamente permitan los reglamentos; y,*

El mencionado cargo no se tendrá en cuenta toda vez que revisado el material fotográfico del Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, se evidencia una única conducta, por lo tanto, no se tendrá en cuenta el mencionado cargo.

- **CARGO SEGUNDO:** *No dar cumplimiento al artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, los cuales establecen los requisitos para el registro de los elementos de publicidad.*

Queda establecido que en los operativos de los días 13 de enero de 2010 y 08 de septiembre de 2010, los cuales fueron realizados por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 16 B No.



53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, se evidenció publicidad exterior visual sin contar con registro vigente ante esta autoridad ambiental, lo cual demuestra el incumplimiento a lo dispuesto en la normatividad que rige la materia, a saber:

El **artículo 5 de la Resolución 931 de 2008**, en concordancia con el artículo 30 del Decreto 959 de 2000, dispone:

“OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR EL REGISTRO, LA ACTUALIZACIÓN O LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL: (...) En consecuencia, los responsables de la publicidad exterior visual deberán presentar la solicitud de su registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente, y obtener su registro antes de proceder a la instalación del elemento. No se podrá instalar publicidad exterior visual en el Distrito Capital sin contar con registro vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente (...)”. (Subrayado, fuera de texto)

DECRETO 959 DEL 2000

“Artículo 30 (modificado por el Acuerdo 12 del 2.000). Registro: El responsable de la publicidad deberá registrarla a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a su colocación, ante el DAMA quien reglamentará y supervisará el cumplimiento de lo previsto en el presente acuerdo. (...)”.

Es igualmente claro, que en el operativo de seguimiento y control ambiental de los días 13 de enero de 2010 y 08 de septiembre de 2010, se constató la presencia de la comisión de la conducta aludida sobre la cual se tipifica la infracción ambiental por parte del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, la cual constituye una conducta de ejecución instantánea que se da los mismos días en que se ubica publicidad exterior visual tipo aviso en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C.

Con la infracción mencionada en el único cargo mencionado anteriormente, se genera un riesgo potencial de afectación por cuanto se trata de un medio perceptible como lo son las unidades del paisaje, dado que al no controlar la publicidad conlleva a contaminación visual. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente *“La colocación de elementos de publicidad exterior visual por fuera de la normativa ambiental, contamina el paisaje altera el equilibrio de los ecosistemas, el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, la seguridad vial, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las actuales y futuras generaciones que puedan habitar Bogotá”¹*; Otra noción que existe sobre este tema se refiere a que: *“La contaminación visual es la alteración del paisaje*

¹ Rodríguez G (2008), Ciudades ambientalmente sostenibles. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario.



causada por elementos introducidos o generados por la actividad humana o de la naturaleza, que rompen el equilibrio del individuo con su medio".²

Así mismo, una vez realizado el análisis técnico jurídico de los cargos, es importante resaltar que estos corresponden a un mismo hecho generador (Publicidad Exterior Visual), lo que configura una afectación sobre el mismo bien de protección ambiental, es decir, sobre el componente social y paisajístico.

En consecuencia, esta Autoridad Ambiental unifica los criterios decisorios, en la medida que la unidad procesal que sustenta tal posición se radica básicamente en la congruencia y unidad en los presupuestos de tiempo modo y lugar de ocurrencia de hechos, ante lo cual sería inocuo desagregarlos en hechos individuales.

Se concluye que según pruebas obrantes en el expediente sancionatorio SDA-08-2011-1387, y las consignadas en el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, se determina que el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, instaló elementos de publicidad exterior visual, de lo cual se desprende la procedencia de los cargos formulados en el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014.**

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES

Teniendo en cuenta, que las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 (Artículos 6 y 7), nótese como el investigado ha infringido una disposición legal con una conducta, pues incumplió la siguiente norma: el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, teniendo en cuenta que ha instalado publicidad exterior visual sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental; esta precisa situación que se relaciona con lo establecido en la Resolución 2086 de 2010 y en el manual conceptual y procedimientos, el agravante de la responsabilidad en materia ambiental.

Adicionalmente, según lo dispuesto en la Resolución 2086 de 2010, también hace presencia el agravante consistente en "*Obtener provecho para sí o para un tercero*", ya que el señor **RAÚL ESTRADA**, obtiene provecho económico por los avisos publicitarios instalados, con la intención de atraer clientes para que ingresen al establecimiento de comercio. Lo anterior determina que para el presente expediente SDA-08-2011-1387, se identifica una circunstancia agravante, de acuerdo con los valores establecidos en la Resolución 2086 de 2010, que para el caso en concreto señala: "**A = 0.2**"

² Rodríguez G (2008), Ciudades ambientalmente sostenibles. Bogotá, Colombia. Editorial Universidad del Rosario.



CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el análisis anterior, considera esta Autoridad Ambiental, que en el presente caso el cargo atribuido al infractor mediante el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014**, prospera teniendo en cuenta que del registro fotográfico que soporta el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012, se evidencia la conducta de ejecución instantánea que de acuerdo al Decreto 959 de 2000, la cual es considerada y tipificada como infracción ambiental, y en consecuencia, debe ser objeto de reproche y sanción.

Que así las cosas, en el expediente obra prueba documental y técnica que dan cuenta de la responsabilidad del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, respecto del incumplimiento de las normas en materia de publicidad exterior visual, que a continuación se cita:

- Artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, toda vez que el elemento no cuenta con registro previo vigente ante esta Secretaría.

Que en concordancia con las fotografías, la descripción y el número de los elementos de publicidad exterior visual que son objeto de evaluación en el Concepto Técnico No. 030086 del 17 de febrero de 2010 y el Concepto Técnico No. 16485 del 27 de octubre de 2010 aclarado con el Concepto Técnico No. 07378 del 19 de octubre de 2012 se demuestra plenamente la conducta que es objeto de infracción ambiental, lo cual presume la legalidad de la actuación administrativa, ya que los documentos técnicos son idóneos para determinar la responsabilidad del propietario del establecimiento comercial frente a las infracciones cometidas y el cargo que se le formulo en el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014**.

Que en este orden de ideas, para esta Autoridad Ambiental queda claro que el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, infringió el derecho colectivo de los ciudadanos y la normativa ambiental vigente, puntualmente el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, teniendo en cuenta que instalo publicidad exterior visual sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental.

Que en conclusión, es obligación de esta Secretaría Distrital de Ambiente por mandato superior, en ejercicio de la gestión asignada, mediante el cumplimiento de las funciones fijadas legalmente



y en el ámbito de su competencia hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales dentro del marco del estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Que teniendo en cuenta que el presente proceso administrativo sancionatorio se inició el 23 de agosto de 2011 con el Auto No. 3683 aclarado el 04 de febrero de 2013 con el Auto No. 00106 y en virtud de lo establecido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012, resulta procedente indicar que éste proceso continuará rigiéndose con el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente para la fecha en que se dio inicio al presente proceso sancionatorio.

Que del análisis técnico y del material probatorio obrante en el expediente SDA-08-2011-1387, se considera que el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, propietario y/o anunciante de los elementos de publicidad exterior visual tipo aviso ubicados en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, infringió la normatividad ambiental en lo que atañe al incumplimiento artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, razones suficientes para que esta Autoridad Ambiental proceda a declararla responsable de los cargos formulados mediante el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014** y procederá a imponer una sanción, como a continuación se describe:

DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos Constitucionales y Legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, al investigado, el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, como responsable de la publicidad exterior visual tipo aviso, instalada en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, en su calidad de propietario y anunciante, quien no logró desvirtuar el cargo formulado, por lo cual la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de la misma acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los Actos Administrativos que expide la Autoridad Ambiental en desarrollo de esa normatividad, deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta Entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas.



Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente precisa en su parágrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

“ARTICULO 40.- Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (...).”

Que el parágrafo segundo del artículo 40 de la ley 1333 del 21 de Julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y en su artículo 2.2.10.1.1.1., dispuso:

“ARTÍCULO 2.2.10.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las autoridades ambientales para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.”

Respecto al proceso de individualización de la sanción el Decreto 1076 de 2015 indica en su artículo 2.2.10.1.1.3., que:

“Artículo 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.”



Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto a la infracción ambiental cometida por el señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente emitió el **Informe Técnico No. 3340 del 26 de noviembre de 2018**, que desarrolla los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA, de conformidad con el artículo 2.2.10.1.2.1., del decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, el cual dispone:

“Artículo 2.2.10.1.2.1.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:

- B: Beneficio ilícito*
- α: Factor de temporalidad*
- i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo*
- A: Circunstancias agravantes y atenuantes*
- Ca: Costos asociados*
- Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)*”

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del **Informe Técnico No. 3340 del 26 de noviembre de 2018**, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los citados criterios, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 el cual prevé: “Artículo 4.- Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA desarrollados para el presente caso respecto de la infracción ambiental del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en el **Informe Técnico No. 03340 del 26 de noviembre de 2018**, así:

“(…)

Dando cumplimiento al artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y habiendo adelantado la metodología para la tasación de multa, se da evaluación a la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

| | |
|------------------------------|-----------|
| <i>Beneficio ilícito (B)</i> | \$ 30,556 |
|------------------------------|-----------|



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

| | |
|--|-------------------|
| Temporalidad (α) | 1 |
| Grado de afectación ambiental y/o riesgo (i) | \$ 34,468,397 |
| Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) | 0 |
| Costos Asociados (Ca) | \$ 0 |
| Capacidad Socioeconómica (Cs) | 0,01 |
| Multa | \$ 375,240 |

$$\text{Multa} = \$ 30,556 + [(1 * \$ 34,468,397) \times (1+0) + 0] * 0,01$$

Multa = TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 375,240)
(...)"

Que atendiendo el desarrollo del modelo matemático antecedido, al igual que las precisiones que se desprenden del registro fotográfico que demuestra las conductas que son objeto de infracción ambiental, que dan lugar a las recomendaciones y/o conclusiones del **Informe Técnico No. 03340 del 26 de noviembre de 2018**, una vez aplicados los criterios establecidos en la Resolución 2086 del 2010 para el cálculo de la multa del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, mediante **Auto No. 3683 del 23 de agosto de 2011** aclarado por el **Auto No. 00106 del 04 de febrero de 2013**, este Despacho encuentra procedente imponer como sanción principal una multa por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$375.240), como consecuencia de encontrarlo responsable ambientalmente del cargo formulado en su contra en el **Auto No. 04616 del 01 de agosto de 2014**.

Que la sanción a imponer mediante la presente Resolución no exonera al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

De otra parte, el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutoria del presente acto administrativo se oficiará al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios, informándole la terminación del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra del señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951.



COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que el mismo artículo en el literal l) asigna a esta Secretaría la competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución 01466 de 24 de mayo 2018, modificada por la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de “Expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios.”

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar responsable ambientalmente al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario y/o anunciante de los elementos de publicidad exterior visual tipo aviso ubicados en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, al instalarlos sin contar con registro vigente ante esta Autoridad Ambiental, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 30 del Decreto 959 de 2000 en concordancia con el Artículo 5 de la Resolución 931 de 2008, respectivamente, conforme al Cargo endilgados, y a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

19



ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en calidad de propietario y/o anunciante de los elementos de publicidad exterior visual tipo aviso ubicados en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., la **SANCIÓN** de **MULTA** por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$375.240)**.

Parágrafo primero. La multa anteriormente fijada, se deberá cancelar en el término de quince **(15)** días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente (Fondo de Financiación del Plan de Gestión Ambiental), Concepto M – 05-550 otros, en la Tesorería Distrital, Ventanilla Número 2, ubicada en el Supercade de la Carrera 30 con Calle 26 y previo diligenciamiento del formato para el Recaudo de Conceptos Varios, disponible en la Sede de la Entidad, ubicada en la Carrera 14 No. 54 - 38. Una vez efectuado el pago se deberá a llegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente SDA-08-2011-1387.

Parágrafo Segundo. Si el citado obligado al pago de la multa no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

Parágrafo Tercero. El **Informe Técnico No. 03340 del 26 de noviembre del 2018**, mediante el cual se determinó y señaló como sanción principal la multa señalada en el presente artículo, hace parte integral de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al señor **RAÚL ESTRADA** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.296.951, en la Carrera 16 B No. 53 – 05 Sur, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Al momento de la notificación del presente acto administrativo, deberá entregarse al infractor o a su apoderado debidamente constituido, respectivamente, copia simple del **Informe Técnico No. 03340 del 26 de noviembre del 2018**, el que únicamente liquida y motiva la imposición de sanción, en cumplimiento del artículo 3 del decreto 3638 de 2010, compilado en el decreto 1076 de 2015.

ARTICULO CUARTO. - Comunicar la presente Resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de



2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo Ente de Control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos legales contemplados en los Artículos 50, 51 y 52 del Decreto 01 de 1984, de conformidad con lo expuesto en el Artículo 30 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre del año 2018

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------|------|-----|------|---------------------------------|---------------------|------------|
| DIANA PAOLA FLOREZ MORALES | C.C: | 1073153756 | T.P: | N/A | CPS: | CONTRATO 20180882 DE 2018 | FECHA EJECUCION: | 19/12/2018 |
| DIANA PAOLA FLOREZ MORALES | C.C: | 1073153756 | T.P: | N/A | CPS: | CONTRATO 20180882 DE 2018 | FECHA EJECUCION: | 18/12/2018 |
| LUZ AMANDA HERNANDEZ PUERTO | C.C: | 23856145 | T.P: | N/A | CPS: | CONTRATO 20180430 DE 2018 | FECHA EJECUCION: | 20/12/2018 |

Aprobó:
Firmó:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

CARMEN LUCIA SANCHEZ
AVELLANEDA

C.C: 35503317

T.P:

N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA
EJECUCION:

27/12/2018

Expediente: SDA-08-2011-1387